

TERCERO. Una vez en estado de resolución, el *****

CUARTO. Por auto ** ***** ** **** ** *** **

QUINTO. Mediante oficio **CCJ/ST/644/2020** de fecha ocho de febrero de dos mil veinte, el Secretario Técnico

CONSIDERANDO:

SEGUNDO La demanda de garantías fue presentada dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia reclamada fue **notificada** a la quejosa por boletín jurisdiccional el **ocho de marzo de dos mil diecinueve**, según se desprende de la constancia de notificación que obra a foja seiscientos tres del juicio de nulidad, tal notificación **surtió efectos** al tercer día

decir, el
ne al art
encioso
del cator
ueve, d
e, diec
treinta y
inhábiles
cada ante
Metropolit
iva el
e puede c
o ocurrió
acto rec
politana c
erto, poro

Sala al re
ada de **
e juicio

TERCERO. El acto reclamado de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es cierto, porque en el expediente relativo al juicio de nulidad ***** , remitido por la Magistrada Instructora de dicha Sala al rendir su informe justificado, obra la sentencia reclamada de ***** ** ***** ** *** *** ***** , en este juicio constitucional, cuyos puntos resolutivos son:

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución impugnada, misma que ha quedado precisada en el Resultando Primero de este fallo. ----- **III.-NOTIFÍQUESE”**.

Además, el Magistrado Ponente, por conducto de la Secretaria distribuyó a los integrantes del Pleno de este Tribunal, copia de la sentencia reclamada y de los conceptos de violación, dejando para constancia en el presente toda copia certificada de la citada sentencia.

QUINTO. A continuación, procede el estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo.

José Alejandro Campos Constantino
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5e.4f
2020-04-04 15:32:29

La quejosa en su primer concepto de violación señala en lo esencial, que la sentencia reclamada es ilegal, porque era procedente otorgarle la prórroga solicitada en términos del artículo 53, del Código Fiscal de la Federación, por lo tanto, al no considerarlo así se violaron los derechos de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, así como lo dispuesto en el diverso 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Indica, que la sentencia es ilegal, al señalar que la información y documentación requerida forma parte de su información contable y, por lo tanto, tenía la obligación de tenerla a su disposición en su domicilio fiscal; ello, toda vez que, dicha situación no es fundamento, ni motivo para negar la prórroga a que hace referencia el artículo 53, inciso c), segundo párrafo, del Código Fiscal, ni mucho menos para imponer una multa.

Manifiesta que es absurdo e ilegal lo resuelto por la responsable, en el sentido de que la información que le solicitó forma parte de su contabilidad, lo que implica que tenía la obligación de conservarla y, por lo tanto, la multa es legal, toda vez que no tendría razón de ser la prórroga establecida en el artículo 53, del Código Fiscal de la

Tales argumentos se estiman **infundados**, atento a las siguientes consideraciones.

El artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, estatuye:

“Artículo 53. En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten éstos informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente:

Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:

a). Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el curso de una visita, deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, en su caso.

b). Seis días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, cuando los documentos sean de los que deba tener en su poder el contribuyente y se los soliciten durante el desarrollo de una visita.

c). Quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos.

Los plazos a que se refiere este inciso, se podrán ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.”

De dicho numeral se aprecia que si con motivo de las

obación, l
entos d
se tend
el tipo
quince c
n que sur
i se solici
men pa
mas y e
entos de
lica que l
es por di
ido sea c

os artículos
iscal de l

personas
obligadas a
o asient

o asiento
lios electr
este Códig
a el Serv

o asiento

III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad, deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o utilidades, de la información necesaria para determinar los ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de la ley citada, así como de las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, de las contribuciones federales, dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate.”

De los artículos citados se advierte que los contribuyentes que se encuentren obligados a llevar su contabilidad, tienen la obligación de conservar su información, así como, los documentos relativos en su domicilio por un plazo de cinco años contado a partir del día siguiente en que se haya presentado la declaración fiscal correspondiente.

esto lo an
eticionaria
evisto en
enido sea
onstituye
cual cons
documenta
es cuyo
ícil obten
iza en el
que la a
para qu
uerida s
porcionar
ampliará
se como
se otorgu
ormación
que, la a

iza en el
que la a
para qu
uerida s
porcionar
ampliará
se como
se otorgu
ormación

que, la a

Sin que esa facultad implique una potestad arbitraria ya que para su ejercicio la autoridad debe fundar y motivar sus determinaciones; esto es, describir los hechos concretos que justifican que los documentos requeridos se tratan de informes cuyo contenido es difícil de proporcionar o de difícil obtención o por el contrario que no lo son.

De ahí que, la negativa de otorgar la prórroga no constituye una restricción al derecho del contribuyente de solicitarla, debido a que siempre gozará del derecho a pedirla, empero eso no implica que indefectiblemente deba concederse la prórroga pedida, ya que ello no está supeditado a que el contribuyente diga que la documentación es de difícil obtención, sino que dependerá del análisis realizado por la autoridad fiscal, en el cual concluya si se trata o no de informes cuyo contenido es difícil de proporcionar o de difícil obtención.

Añade, que de sostener que la prórroga citada solo se concede cuando se requiera al contribuyente información que no forma parte de su contabilidad, se le estarían dando facultades a la autoridad fiscal de requerir documentación de terceros o que no forma parte de su contabilidad.

Argumento que igualmente se estima **infundado**.

Los plazos ahí previstos son distintos dependiendo del tipo de información pedida, así, en el inciso a) se prevé que si se piden libros y registros que formen parte de la contabilidad del contribuyente, éstos deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico,

Por su parte, en el inciso b) se indica que, si lo requerido son documentos que sean de los que deba tener en su poder el contribuyente, se le otorgan seis días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para exhibirlos.

Finalmente, en el inciso c) se establece que, si lo
pedido son documentos diversos a los antes citados, se
otorga al contribuyente el plazo de quince días contados a

Como puede observarse, en el citado artículo se mencionan distintos tipos de información que pueden solicitarse a los contribuyentes, entre los cuales se encuentra su contabilidad, sin embargo, ésta no es la única que puede pedirse, pues en el propio precepto se indica que también puede solicitarse otros documentos que deba tener en su poder [inciso b)], o diversa información [inciso c)].

En consecuencia, no solo puede pedirse información relativa a la contabilidad del contribuyente, sino también otros documentos e informes.

Por tanto, se infiere que la prórroga que puede otorgarse se refiere a informes respecto de documentos distintos a los previstos en los incisos a) y b) cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.

En otro orden de ideas, la parte quejosa aduce que, es ilegal la sentencia reclamada porque la juzgadora la sostuvo que la información que le fue solicitada y respecto de la cual pidió la prórroga forma parte de su contabilidad, por ende, se

Añade, que no toda la información que le fue pedida forma parte de la contabilidad, siendo que, conforme al artículo 28, fracción I del Código Fiscal de la Federación, ésta se integra por sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

Refiere que la documentación requerida, se trata de aquella relacionada con papeles de trabajo muy detallados con datos precisos, balanzas de comprobación e integraciones especiales, entre otra, que, si bien se pueden obtener de los datos que integran la contabilidad de su representada, lo cierto es que de momento no forman parte de la misma, al tratarse de integraciones especiales.

Asimismo, se solicitó se le proporcione la integración anual de diversas partidas con ciertos datos específicos, mismos que no son generados de manera automática por los sistemas contables de la quejosa, por lo que se ve en la necesidad de elaborar dichas integraciones de la manera especial en que se pidió.

Dichos argumentos son ineficaces ya que con ellos no ataca las razones que dio la Magistrada de la Sala para considerar que los documentos que le fueron pedidos sí forman parte de su contabilidad, lo cual es lo que debió combatir, sin embargo, no lo hizo.

De manera que, la quejosa debió formular argumentos para demostrar que tales documentos no forman parte de su contabilidad, pero no lo hizo, lo único que manifestó fue que no toda la información solicitada formaba parte de su contabilidad porque se trata de información y documentación que requiere cierto detalle específico y que se tiene que elaborar, empero con esa manifestación no da razones de porque no toda la información forma parte de su contabilidad.

Aunado a que con esa manifestación solo indica que se trata de información que requiere cierto detalle y que se tiene que elaborar pero con ello no demuestra que no forme parte de su contabilidad ni que sean de difícil obtención o de proporcionar, lo único que acredita es que tendría que invertir varias horas de trabajo para realizar los documentos requeridos por el detalle que conlleva pero no que sea difícil, pues aunque pueda invertir varias horas para su formulación eso no implica que sea difícil sino laborioso, lo cual son cosas distintas.

Asimismo, es ineficaz el argumento en donde la quejosa arguye que, la autoridad debe limitarse a solicitar los documentos, datos e informes que conforman la contabilidad de la contribuyente, respetando la manera en que se lleva y no solicitar que esa información sea proporcionada a manera de integraciones.

Esto es así porque con ese argumento combate aspectos que no se abordaron en la sentencia reclamada.

En efecto, en la sentencia reclamada no se realizó pronunciamiento en cuanto a si la autoridad fiscal al ejercer sus facultades de comprobación, debe limitarse a solicitar los documentos, datos e informes que conforman la contabilidad de la contribuyente, al respetar la manera en que ésta la lleva, y no solicitar que tales documentos, datos e informes le sean proporcionados a manera de integraciones, de la forma concreta y específica en que la propia autoridad lo indique, ello, pues de esa manera el gobernado se ve en la necesidad de elaborar papeles de trabajo o integraciones especiales, que si bien, pueden ser obtenidos a partir de los datos que se contienen en la contabilidad, en ese momento no forman parte de la misma.

entencia
que la au
ormación
especia
n la ley, p
e que
e difícil c
a la amp
ento, ya c
ue el cor
porque c
a senten
e propor
ora pret
encia rec

que el con
porque c
a senten
e propor
ora pret
encia rec

indudablemente lo que la institución que no fue ahí que

Por lo tanto, es claro que el concepto de violación de que se trata es inoperante, ya que con su contenido no controvierte las consideraciones de la sentencia reclamada, pues pretende poner de manifiesto su inconstitucionalidad con argumentos que no fueron analizados.

En otro orden, en el segundo concepto de violación en lo esencial se argumenta que, contrario a lo sostenido por la juzgadora, en el presente caso no se configura la conducta prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y por ende no es procedente que se le imponga una multa, esto ya que, la contribuyente solicitó una prórroga para poder cumplir con el requerimiento, lo cual conlleva a que no se actualice el supuesto de la norma, porque en ningún momento se negó a presentar la información sino únicamente solicitó un plazo mayor para presentarla.

Aduce que la responsable fue omisa en tomar en consideración un criterio emitido por el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que señala que no se actualiza la infracción prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, cuando el destinatario del requerimiento solicite una prórroga con fundamento en el diverso 53, del referido código, además, que existen diversos precedentes en los que se resolvieron en este sentido.

“Artículo 85. Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes:

“Artículo 86. A quien comenta (sic) las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 85, se impondrán las siguientes multas:

En los citados numerales se prevé que son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación, entre otras, no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros.

De ahí que, quien incurra en esa omisión se le impondrá una multa de \$17,370.00 (diecisiete mil trescientos

Ahora bien, en el presente asunto, ** ***, la Administración de Fiscalización a Grupos de Sociedades “5” de la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedades de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, mediante oficio número ***, en ejercicio de sus facultades de comprobación, requirió a la parte quejosa diversos informes, datos y documentos relacionados con el ejercicio fiscal de dos mil doce.

José Alejandro Campos Constantino
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5e.46
2020-04-04 15:32:29

el precep
ón que pr
de la facu
los da
des fisca
el conte
mentos c
de oblig
sahogó
fracción
e se le
acción I,

sahogó
fracción
se le
acción I,

considera
es infun
dad adm
ón de
erida, se
cción I, c

ente exija
imiento
para cur
ido cuer
amiento l

debido a
vente y a
o para qu
le fue
actualiza
fracción
el cumplim
ntar a la
mbién h
situación

que el c
o, porque
trae con
a, estable
de la F

ANTES DE
ENTE, SIN
EN DICHO
CUANT
e actualiz
nte los do
fiscal de
comproba
quéllos de
al artículo
ue el cump
pero antes
a, libere al
secuencia
niento del
ón I, del Co
o y un me
damentac
Constituc
antificarla
e tiendan
porcional
mple exte
ntes de c
a, el tiempo
a al momen

es infur
ia reclam
contrari
on el con

ra que con
tributario e
on de l
fracción I
ulta fiscal,
on el fin
ación tribu
parte q
formación
a de la n
a de la
to del deb
e que ocu
alidad de
sujetos pa
en omisió
nsiderado
adición c

parte q
formación
a de la n
a de la
to del deb
e que ocu
alidad de
sujetos pa
en omisión

en omisión
considerado
adicción c

***“...De acuerdo con los dictámenes transcritos, la finalidad de las medidas de apremio a que se refiere el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación es desincentivar las conductas que obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, y vencerlas una vez que son desplegadas, a efecto de hacer efectivo el imperio de las autoridades al hacer uso de ellas y que los particulares obedezcan sus determinaciones. Aspectos que son de evidente interés público y son los que se pretenden tutelar a través de las opciones con que cuenta la autoridad, entre ellas, la multa, cuya finalidad es erigirse en un instrumento jurídico idóneo generador de cierto tipo de presión para disuadir e incluso superar la resistencia del sujeto que obstaculiza el ejercicio de las facultades comprobatorias de la autoridad, a fin de allanarlo.*”**

En efecto, el legislador expresamente instituyó la multa a que se refiere la fracción II del precepto en análisis, como una medida de apremio, lo que significa que es su voluntad la que la convierte en un instrumento con que cuenta la autoridad fiscal para compeler al contribuyente a efecto de que éste permita el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Y, en ese tenor, es de destacarse que la indicada porción normativa no indica un "monto o rango en relación con dicha multa, sino que precisa que será la que 'corresponda en términos de este código', es decir, del propio Código Fiscal de la Federación, lo que revela que el legislador propicia una interpretación sistemática del ordenamiento, por lo que la disposición en estudio no puede ser apreciada fuera del contexto al que pertenece, pues su sentido debe ser completado por otros preceptos pertenecientes al mismo cuerpo legal, por lo que es necesario hacer un ejercicio constructivo para determinar su efectivo alcance; sin que

Y, en este tenor, el contribuyente queda obligado a poner a la vista y/o entregar a la autoridad la documentación e información que le sea requerida y, más aún, en los plazos expresamente previstos por el legislador para cada caso, dadas las obligaciones fiscales a que se encuentra sujeto.

Por lo que, evidentemente, cuando el causante no satisfaga las exigencias que al efecto se le formulen en los plazos legales, deberá entenderse que despliega una conducta que impide el ejercicio de las facultades de comprobación, de modo que la autoridad carecerá de los elementos para conocer la situación fiscal de aquél; quedando así en aptitud de imponer, como consecuencia, las medidas de apremio a que se refiere el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, entre ellas 'la multa que corresponda en los términos de este código, con la finalidad de vencer la resistencia por parte del obligado a cumplir la prevención.

Asimismo, adquieren relevancia los artículos 71, 85, fracción I, y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que dicen:

"Artículo 71. Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las personas que realicen los supuestos que en este Capítulo se consideran como tales, así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo a aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos.

Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que se imponga."

"Artículo 85. Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes:

I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros, o no aportar la documentación requerida por la autoridad

''' '''
''' '''

I. De \$13,720.00 a \$41,170.00 a la comprendida en la fracción I. ..."

Por lo que, la actualización del supuesto infractor amerita la imposición del correctivo o punición correspondiente, que puede ser como medida de apremio o como sanción, porque resultará válido la aplicación de ese correctivo o punición ya sea para ejercer presión y orientar el comportamiento del gobernado a efecto de evitar que obstaculice el ejercicio de las facultades de comprobación, o para castigar la conducta si se incurre en definitiva en esa actitud. Es decir, la multa como medida de apremio podrá imponerse como resultado del desacato por parte del particular a un mandato con apercibimiento, sin perjuicio de que, en su defecto, la propia multa pueda imponerse como sanción con base en un hecho pasado y en la valoración de las circunstancias del caso (contumacia, gravedad, dolo, etcétera) y sin necesidad de

apercibimiento previo, sobre todo cuando en el ejercicio de las facultades de comprobación no se haya impuesto amonestación alguna.

Así pues, al caso, adquiere especial relevancia lo relativo a la medida de apremio, para cuya aplicación es jurídicamente válido acudir a lo que establece el artículo 86, fracción I, del ordenamiento en análisis que, por disposición expresa del legislador, establece como consecuencia de esa conducta la imposición de una multa de \$13,720.00 a \$41,170.00".

En efecto, los contribuyentes que no presenten documentación o información a requerimiento de la autoridad exactora, podrán hacerse acreedores a la imposición de la multa que corresponda en aplicación estricta del artículo 40, fracción II, del Código Fiscal de la Federación; y, para fijar su monto, debe acudirse al parámetro fijado por el propio ordenamiento (pues así está manifiestamente establecido por el legislador), por lo que resulta válida la interpretación sistemática de esa norma en relación con los artículos 85, fracción I, y 86, fracción I, del mismo cuerpo legal, ya que si bien la medida de apremio a que se refiere el primero de los numerales tiene como finalidad dotar a la autoridad administrativa de medios coactivos que permiten el cumplimiento de sus determinaciones en aras de salvaguardar el fin recaudatorio a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo cierto es que el último de los indicados numerales se refiere al concepto genérico de infracciones', dentro de las que el mismo ordenamiento normativo incluye aquellas actitudes que impidan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de comprobación.

Esto es, el citado artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación cobra aplicación tratándose de medidas de apremio, en virtud de que se actualiza ante la infracción a la ley, cuya actualización sólo requiere, se insiste, inobservar las obligaciones tributarias impuestas por la ley al contribuyente, como lo es la presentación de la información

tud de im
 a que se
 ión (hoy
 entre ell
 io código
 del obliga
 lo cual
 ación o in
 podrán
 a que co
 ón II, del
 , debe ac
 o (pues
 egislador)
 ática de
 n I, y 86
 la medida
 culos tie
 iva de m
 sus de
 caudatori

lo cual
ación o in
podrán
a que co
ón II, del
, debe ac
o (pues
egislador)
ática de
n I, y 86
la medida
culos tie
iva de m
sus de
caudatori

s que e
actitud

deraciones
s, se a
ejosa, e
s estable
ración, e
obstaculiz
de la au
en aptitud
amiento e
haber pres
mediata.

de la Sup
a página
te al me
ta del Se
ue dice:

"MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA FIJAR SU MONTO POR IMPEDIR EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, DEBE ACUDIRSE AL SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO. El artículo 40, fracción II, del Código Fiscal de la Federación prevé la imposición de una multa como medida de apremio dirigida a desincentivar las conductas que obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, pero no señala su monto; por lo que éste debe fijarse a partir de la aplicación sistemática de dicho artículo, en relación con los diversos 85, fracción I, y 86, fracción I, del mismo ordenamiento, ya que si bien la medida de apremio aludida tiene como finalidad dotar a la autoridad administrativa de medios coactivos que permitan el cumplimiento de sus determinaciones en aras de salvaguardar el fin recaudatorio mencionado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que el último de los indicados numerales se refiere al concepto genérico de "infracciones", dentro de las que el propio ordenamiento normativo incluye cualquier actitud que impida u obstaculice el ejercicio de las facultades de comprobación. Por tanto, se trata de una estructura normativa que no permite su apreciación aislada sino que, al contrario, lleva al órgano aplicador a realizar un enlace de sus contenidos, para hacer posible la aplicación de la medida de apremio, sobre todo porque se trata de un supuesto que afecta directamente el interés público, al tener como objeto constituirse como una herramienta efectiva para que el fisco logre el ejercicio de sus facultades de comprobación".

De ahí lo infundado del argumento en estudio.

Figure 1

Notificará a

artículo 13

se indicará
nformes o

libros o
por la perso

... frecuencia de

contabilidad
idarios o

Contribuyendo a la red

observación
notificará

nsentidos
observaci

VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción IV de este artículo, cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior, será de dos meses, pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente.

IX.- Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente.”

De la anterior transcripción se desprende que, el precepto establece el procedimiento que se deberá llevar en los casos en que las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes, informes, datos, documentos, así como, su contabilidad fuera de una visita domiciliaria y que se debe de entender por ésta última.

Con lo anterior, se pone de manifiesto lo infundado el concepto de violación de que se trata, porque el artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, no establece en ninguna de sus fracciones, que en caso de que la autoridad fiscal

requiera a los contribuyentes información y documentos en términos de lo previsto por el diverso 53, del referido ordenamiento legal y no de cumplimiento, se requerirá nuevamente a efecto de que desahogarlo previo a la imposición de la multa contenida en los preceptos 85, fracción I y 86, fracción I, del citado Código.

No obstante, como se ha expuesto, ante la negativa por parte de la autoridad administrativa de ampliar el plazo, para la presentación de la documentación e información que le fue requerida, se actualiza la infracción prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, consistente en no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros, porque para cumplir con tal obligación, el contribuyente requerido cuenta con el plazo que prevé el artículo 53 del ordenamiento legal.

En tales condiciones, es indudable que el concepto de violación de que se trata es infundado, porque al no ser procedente la petición de la entonces contribuyente, en el sentido que se ampliara el plazo para que presentara la información y documentación que le fue requerida por la autoridad administrativa, ello actualiza la hipótesis normativa

cción I, d
amiento de
autoridad
nacerlo d
que no oc
posición d
rigen, no
por seg
sa para
que no p
sde el mo
se ma
que el inc

cción I, d
amiento de
autoridad
nacerlo d
que no oc
posición d
rigen, no
por seg
sa para
que no p
sde el mo
se ma
que el inc

cción I, d
amiento de
autoridad
nacerlo d
que no oc
posición d
rigen, no
por seg
sa para
que no p
sde el mo
se ma
que el inc

En tales condiciones, como se indicó, el concepto de violación de que se trata es infundado, porque como se ha visto, no es necesaria la exigencia de un segundo requerimiento para que se actualice la hipótesis normativa relacionada con la sanción e imposición de la multa impuesta a la quejosa.

Ese argumento debe desestimarse.

Esto es así porque como bien lo señaló la Magistrada Instructora no procede la devolución del pago realizado por concepto de multa, toda vez que como quedó analizado, la imposición de la multa es correcta.

Sin embargo, no es posible lo que pretende la peticionaria de amparo ya que la juzgadora reconoció la validez de la resolución impugnada en donde se le impuso la citada multa y como puede observarse, los conceptos de violación que aquí se analizaron no prosperaron, de ahí que, no haya motivo alguno para que pueda ordenarse la devolución de lo que la peticionaria de amparo llama “pago de lo indebido”.

Esto es, la única manera en que pudiera ordenarse su devolución sería si se hubiera declarado la nulidad de la resolución por medio de la cual se le impuso la multa y esa determinación se encontrara firme, pero eso no sucedió.

En tales condiciones, es claro que aun cuando la quejosa, hubiere cubierto la multa que le fue impuesta, no es procedente analizar el derecho subjetivo relacionado con la devolución del pago de lo indebido que pretende, pues como se ha visto, la multa contenida en oficio *****

***** * **** **** ***** ***** ***** ***** *****

Así, es indudable que no es procedente estimar que podría existir el derecho subjetivo de la parte entonces actora y ahora quejosa a que se reconozca el derecho subjetivo de devolución de pago de lo indebido, ya que como se ha expuesto, lo hace depender de la validez de la resolución impugnada, cuyo contenido fue declarado válido.

Por último, debe señalarse que no resulta necesario hacer un análisis sobre los alegatos de las autoridades tercero interesadas, en tanto que y, por ende, deberá estarse a lo resuelto por este Tribunal Colegiado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del

Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “**ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.**”

En este orden de ideas, al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión **no ampara ni protege**

a ***** , *****

***** , en contra de la sentencia de veintisiete de febrero

de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada Instructora de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad *****

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, en

hívése

nidad
 dente U
 rtiz Cru
 onio Mo
 iones de
 ero de o
 a Judicial
 o el Pl
 re este T
 ludida C
 n curso,
 1, fracci
 Federac
 uerdo G
 al, que
 propio C
 egiado
 do ponen
 ados, el

Evidencia Criptográfica – Transacción

Archivo Firmado: 00840000247817460008008.doc

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s):

Firmante	Nombre:	José Alejandro Campos Constantino	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000000005e46	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/03/2020T16:25:44Z / 06/03/2020T10:25:44-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	Sha256withRSA			
	Cadena de Firma:	71 6d ca 80 49 5c 81 b6 ea 30 57 f9 b0 e6 5b 15 36 64 1e b8 f1 e4 56 4e 6c 0e 50 8a 09 ca 62 0c 1d 79 87 20 f4 a0 de b2 12 82 e7 92 2c 77 71 bf 02 45 0d e0 16 4b dc 13 a3 53 b6 34 49 b6 1a 1b be 1f 56 13 77 47 ed 61 68 0b 8b d0 82 a9 26 79 cc f6 cf 76 23 2d 75 a2 39 24 cb 0b b8 4f fa 11 79 41 75 bf df 0f 7d 53 e2 36 67 f7 bb ff 19 17 fe 4e 1a 23 ff 63 3f 6a 5a 87 d3 45 45 c5 1a 68 fd b0 c1 80 c0 b3 a0 8e 2f 1e b4 63 87 24 72 13 e2 42 46 17 ab 94 ba 14 8e e5 32 71 1f 95 5c d2 60 fa 04 bb be aa 5c 67 03 61 89 df 53 34 b4 4e 59 1b 39 4c 28 81 47 8c 57 1a dd 53 df bb 62 a0 b2 6a 1b 33 a3 29 86 30 21 91 49 a8 e1 59 17 b8 3f d6 6a 1c ff 18 89 1b de f7 1e c7 85 16 74 bd ed 90 47 28 8c 97 81 b0 5b 36 01 15 b6 be 77 ed 9c d8 ca 6b 13 66 02 6a 2f a5 93 6f ef 92 91 3d			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/03/2020T16:25:44Z / 06/03/2020T10:25:44-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			

Archivo firmado por: José Alejandro Campos Constantino

Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05e.46

Fecha de firma: 06/03/2020T16:25:44Z / 06/03/2020T10:25:44-06:00

Certificado vigente de: 2017-04-05 15:32:29 a: 2020-04-04 15:32:29

El seis de marzo de dos mil veinte, el licenciado José Alejandro Campos Constantino, Secretario(a), con adscripción en el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.